



Expdte. A-050/02-DJ

**“Análisis y Planteamiento de un Modelo de Datos
para la Explotación Estadística en la
Administración de Justicia”**

17 de junio de 2003

SEINTEX





ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	2
2	METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS.....	7
3	DEFINICIÓN DE UN MODELO DE DATOS.....	12
3.1	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO	12
3.1.1	<i>Necesidades de información.....</i>	<i>12</i>
3.1.2	<i>Entorno normativo.....</i>	<i>20</i>
3.2	OTROS ACTORES IMPLICADOS.....	39
3.2.1	<i>Tribunal Superior de Justicia</i>	<i>39</i>
3.2.2	<i>OVAJ</i>	<i>48</i>
3.2.3	<i>EUSTAT.....</i>	<i>58</i>
3.2.4	<i>Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia</i>	<i>61</i>
3.3	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.....	64
3.3.1	<i>Necesidades de información.....</i>	<i>64</i>
4	IMPACTO DE LAS REFORMAS NORMATIVAS SOBRE LA ESTADÍSTICA JUDICIAL.....	72
5	CONCLUSIONES	78

1 Introducción

Para el Gobierno Vasco, la cuantificación de la actividad de la Administración de Justicia constituye uno de los factores informativos básicos; sin embargo, para perfeccionar el conocimiento orgánico, resulta necesario complementar la información cuantitativa con estimaciones cualitativas del servicio prestado al ciudadano. Sólo mediante el estudio, comparación y puesta en común de ambas valoraciones se consigue un todo consistente desde el cual es posible tomar las decisiones.

De lo anterior se desprende la importancia de identificar todos los elementos que pueden ser susceptibles de contribuir al proceso de decisión en la gestión y política judicial desempeñada por el Gobierno Vasco, independientemente de si son valores cuantificables o no.

Por lo tanto, la finalidad del presente estudio –y destacando su carácter preliminar- no es otra que la definición de un modelo de datos genérico, que considere todos los actores implicados y toda la información aglutinada en la estadística referente a la Administración de Justicia.

Sin embargo, es importante recordar que la definición del presente modelo de datos toma como base una clara distinción dentro de la materia estadística, a saber:

- Por un lado, se ha identificado la estadística judicial, entendida como ordenación de datos generados por la actividad jurisdiccional y, que por tanto, concierne esencialmente al Consejo General del Poder Judicial.
- Por otro, la estadística para la gestión, que es la requerida por el Gobierno Vasco como elemento de insumo para el ejercicio de sus funciones.

La sutil diferencia entre ambos conceptos es la que permite enmarcar el actual estudio como un “Modelo de Datos para la Explotación Estadística en la Administración de Justicia”, sin realizar injerencias en competencias ajenas al propio Gobierno Vasco.

Ahora bien, para la toma de decisiones inherente a la función pública, resulta indispensable contar con un detalle de las actividades desarrolladas. El análisis, no obstante, no puede detenerse en ese punto: se debe complementar con información que permita también un criterio de referencia, una evaluación completa que constituya la base racional del futuro conjunto de decisiones ejecutivas.

Esta información, por el alcance geográfico y humano de las funciones propias de la justicia, debe ofrecerse en forma estadística, como disección de todos y cada uno de los aspectos que afectan a la Administración de Justicia: recursos humanos y materiales, producción, resultados de planes de acción, índices de calidad, etc... Nace pues, esta necesidad, con una indiscutible vocación unitaria.

El desarrollo de la estadística en materia de justicia ha respondido, hasta este momento, a criterios accidentales y necesarios. “Necesarios” por lo ineludible de su impulso y “accidentales” por cuanto no se ha planificado un curso ordenado ni se ha contado con todos los actores implicados. Se ha resuelto sobre la marcha en función de las necesidades de cada uno de ellos, individualmente, sin contar con acuerdos estables y permanentes.

El objeto de este estudio no debe considerarse una propuesta de trabajo ni una planificación de la actividad estadística que se debe llevar a fin: son las instituciones implicadas las que deben definir sus propias políticas en el margen otorgado por la normativa vigente. Por el contrario, es este un trabajo que fija la vista en la colaboración de los actores implicados en esta actividad, que requieren un constante intercambio de información. Para ello se fijan las bases de los requerimientos informativos de cada uno de ellos, buscando una cooperación dinámica y sensible.

Así, la información estadística que se elabora desde el Consejo General del Poder Judicial y el tribunal Superior de Justicia no debe ser sólo de autoconsumo. Es evidente que por el interés que también tiene dicha información para la gestión, las Comunidades Autónomas y otros responsables públicos deben tener acceso o disponer de dicha información. Esta retroalimentación es totalmente válida también en sentido contrario: las administraciones públicas competentes deberían compartir las

informaciones y estudios estadísticos que realizan con los órganos rectores del Poder Judicial.

Tras un análisis riguroso de la realidad estadística, la necesidad de contar con información fiable aparece como cimiento de cualquier gestión eficaz. Paralelamente, al delimitar la naturaleza de dicha información con criterios materiales estrictos puede contravenir una práctica administrativa dinámica y abierta. En el caso que nos ocupa, la parcelación de la información disponible impide obtener una visión amplia del funcionamiento de la administración de justicia; un conocimiento que englobe su producción jurisdiccional, su gestión de recursos, la percepción del ciudadano y la relación con entes externos.

También se ha considerado la potestad inspectora que se atribuye al Consejo General del Poder Judicial; las atribuciones de este órgano de gobierno son las más extensas y responden a su naturaleza de órgano de gobierno del Poder Judicial; en consecuencia, la política a seguir en cuanto a estadística judicial debe tener en cuenta las funciones de inspección y dirección que le corresponde.

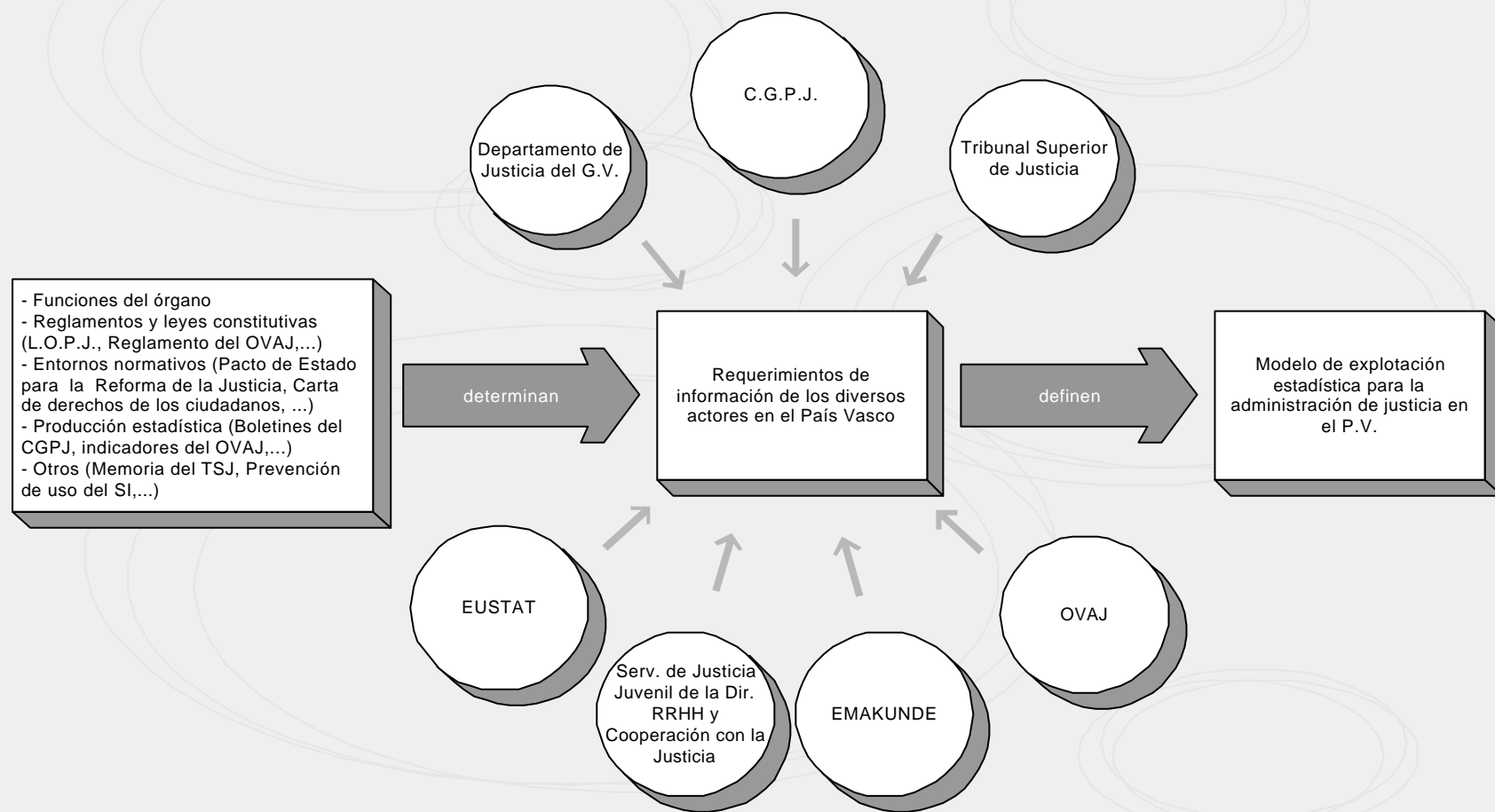
De la cambiante realidad social que demanda medios, inversiones y protección, surgen diversas exigencias ciudadanas, tal y como anuncia la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Dimensionar estos requisitos obliga a revisar los contenidos estadísticos de forma constante. Los compromisos asumidos por el Estado ante los ciudadanos incluyen, entre otros: ayuda a las víctimas –alcanzando cotas urgentes y de alarma social en el caso de la violencia doméstica-, extranjería, acondicionamiento de las sedes para discapacitados, centros educativos de menores, eukaldunización, etc...

El contenido del presente estudio, elaborado por *SEINTEX* por encargo conjunto del Departamento de Justicia, Empleo Y Seguridad Social del Gobierno Vasco y del Consejo General del Poder Judicial, se ha organizado en cinco capítulos claramente diferenciados:

1. En el primero, el actual, se ofrece la introducción al estudio.

2. El segundo capítulo contiene la metodología empleada para el diseño del modelo de datos genérico, con un desglose de las fuentes y actores involucrados.
3. El tercer capítulo contiene la propia definición del modelo de datos, desglosado en tablas resumen con los requerimientos de información correspondientes a cada uno de los actores señalados en el capítulo 2. El apartado que aborda las necesidades del Gobierno Vasco cuentan además con un breve estudio del contexto normativo e institucional y resúmenes ejecutivos con referencias directas al texto, para facilitar su lectura.
4. En el capítulo cuatro se ofrece un análisis de los futuros cambios normativos con una disección de las consecuencias que conllevan en el entorno estadístico.
5. Por último, en el capítulo cinco se esbozan las conclusiones del presente estudio.

Definición del Modelo de datos para la explotación estadística en la Administración de Justicia del Gobierno Vasco





2 Metodología para la obtención de datos

Se han tomado en consideración tres puntos esenciales para la elaboración del cuadro de requerimientos de información que se dibuja en el presente apartado: en primer lugar, el marco normativo en el que se encuadra la confección y el diseño de la estadística; en segundo lugar, los actores que intervienen en el desarrollo de esta función, ya sea de forma directa o tangencial; por último, los reportes, informes o cuadros que estos actores elaboran y exponen como parte del ejercicio de sus funciones, esto es, su producción estadística.

Para la confección de este estudio se ha atendido a la distinción entre “estadística judicial” y producción estadística necesaria para la gestión.

Como primer elemento de análisis, se toma la información requerida por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco como instrumento básico para llevar a término su función constitucional y estatutariamente establecida. Como segundo elemento de análisis, es importante conocer también la información necesaria para otros órganos institucionales, que se revela como una compleja composición de diversas materias. Esta composición heterogénea constituye en ocasiones una miscelánea difícil de delimitar, un aspecto que, como se verá, complica tanto la recogida de datos como su posterior procesamiento. En consecuencia, evitando obstruir la tarea de descripción de necesidades (objeto esencial de este trabajo), no se intentará en lo posterior clasificar ni circunscribir estas agrupaciones estadísticas a ninguna categoría concreta.

Finalmente se establece el modelo de datos genérico necesario para la estadística judicial, competencia del CGPJ.

En este contexto, la legislación es escasa y no aborda directamente esta materia sino que la engloba dentro de una competencia estadística genérica, que se atribuye al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Euskadi *para sus fines y competencias*, a la vez que se determina al CGPJ como receptor de los boletines que anualmente se completan en todos los órganos jurisdiccionales bajo la responsabilidad de cada secretario judicial. En este sentido se manifiesta también el Consejo General del



Poder Judicial cuando afirma que *en principio hay que advertir que ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en los diversos Reglamentos dictados por el Consejo, se regula esta materia con nitidez. Únicamente en algunos preceptos se hace referencia tangencial al tratar de la Memoria anual, estudios estadísticos, funciones de los Secretarios Judiciales o Servicio de Inspección.*

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, la configuración de la estadística en el País Vasco emplea como referentes distintos textos normativos y acuerdos entre instituciones. Deben destacarse:

1. Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco
2. Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay que tener en cuenta el Proyecto de Ley de reforma de la LOPJ.
3. Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
4. Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001
5. Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia
6. Acuerdo de la Conferencia Sectorial en materia de administración de justicia celebrada en Las Palmas de Gran Canaria de 22 de mayo de 2001
7. Segundo preacuerdo entre el Departamento de Justicia del País Vasco y las Organizaciones Sindicales sobre la modernización en prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración de justicia.

Por otra parte, como segundo elemento de análisis, cabe considerar a los diversos actores de la estadística, activos e institucionales, aunque en su mayoría participan únicamente como observadores de la realidad judicial y jurisdiccional:

- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



- Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
- Tribunal Superior de Justicia del Gobierno Vasco (TSJ).
- Observatorio Vasco de la Administración de Justicia (OVAJ)
- Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT)
- Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Vasco y Cooperación con la Justicia. Aunque sea un Servicio del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por su especialidad merece un tratamiento separado.

Estos órganos han diseñado y recopilado -según sus funciones informativas, administrativas o jurisdiccionales- estadística para su exhibición pública o aprovechamiento propio. Como resultado del trabajo de recopilación de informes de índole estadística en materia judicial, generados por los actores anteriormente citados, el modelo de datos para su explotación que se ofrece en este estudio ha sido generado a partir de:

- Boletines estadísticos del Consejo General del Poder Judicial.
- Indicadores del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia.
- Borrador del Reglamento de Regulación de la Estadística Judicial.
- Reglamento 1/1997 del Centro de Documentación Judicial.
- Código de Conducta para Usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia.
- Módulos de Trabajo de Jueces y Magistrados (2002).
- Web del CGPJ (www.poderjudicial.es).
- Web de la Administración de Justicia en Euskadi promovida por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco (www.justizia.net).

- Memoria del Tribunal Superior de Justicia.
- Mecanismos de Seguimiento de la Prevención del TSJ.
- Ley 4/1986 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
- Segundo Pre-Acuerdo entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las organizaciones sindicales, sobre la modernización en la prestación del servicio público de la justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- Índices de Gestión generados por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
- Indicadores de calidad generados por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
- Web de Instituto Vasco de Estadística - EUSTAT (www.eustat.es).
- Decreto 12/2000 por el que se establece la estructura orgánica del Instituto Vasco de Estadística.
- Plan para la ejecución de medidas. Modelo de ejecución de Justicia Juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Decreto 81/2001 de creación y regulación del OVAJ.
- Reglamento de funcionamiento del OVAJ.
- Informe con la propuesta de indicadores del OVAJ.

Así, desde el marco jurídico existente y determinando sobre él las necesidades que se extraen del desempeño de las funciones de cada uno de estos órganos, se han determinado los requerimientos estadísticos de cada uno de ellos, delimitando primero sus competencias, estableciendo después sus necesidades de información y



resolviendo en último término los datos judiciales que obtienen y las tipologías que emplean en su composición estadística.



3 Definición de un modelo de datos

3.1 Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco

3.1.1 Necesidades de información

El Departamento de Justicia del País Vasco asume todas las competencias ejecutivas relativas al ámbito de la justicia que se le otorgan en el Estatuto de Autonomía. Estas incluyen la gestión de medios materiales y personales para la puesta en funcionamiento y posterior desempeño de los órganos judiciales en el seno de su territorio.

En lo concerniente a estadística, el Departamento de Justicia posee unos requerimientos de información amplios y claros, puesto que necesita datos de diversa índole que le ayuden a dictaminar el buen curso de la administración que gestiona. Así, para determinar el rendimiento de sus medios materiales y humanos requiere datos que le informen acerca del volumen de trabajo soportado por los órganos judiciales, el volumen de trabajo resuelto y la saturación existente.

La mejora de la organización y la modernización de las oficinas judiciales se encuentran entre los desafíos que se anuncian tanto en el Pacto para la Reforma de la Justicia como en los acuerdos de la Conferencia Sectorial realizados posteriormente. Estas tareas asumidas por el Departamento de Justicia del País Vasco, condicionan sus requerimientos de información, tal y como puede observarse en los cuadros que se muestran a continuación:

Fuentes normativas que delimitan la actuación del Gobierno Vasco en materia de explotación estadística

Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 6/85):

Objetivo: Constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales (Art. 122 C.E.).

- Art. 35,2: La C.A. participará en la demarcación judicial de su territorio, remitiendo al gobierno, a solicitud de este, una propuesta en la que fijará los partidos judiciales.
- Art. 35,6: la C.A. determinará por Ley la capacidad de los Partidos Judiciales.

Gobierno Vasco

Estatuto de Autonomía para el País Vasco (L.O. 3/79):

Objetivo: Instrumentar la nacionalidad y el autogobierno de la CA.

- Art. 9,2: Los poderes públicos vascos velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
- Art. 10,4: Régimen local y Estatuto Funcionarios del P.V. y de su Administración Local.
- Art. 10,5: Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial.
- Art. 10,14: La organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección, tutela de menores, penitenciarios y reinserción social.
- Art. 10,37: La estadística del P.V. para sus propios fines y competencias.
- Art. 35,2: El órgano competente convocará concursos y oposiciones para el acceso a los puestos de magistrado, juez y secretario.
- Art. 35,3: corresponderá a la C.A. la provisión del personal al servicio de la administración de justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento.
- Art. 35,4: la C.A. y el Ministerio de Justicia mantendrán colaboración para la ordenada gestión de la competencia asumida por el P.V.

Puntos de incidencia en la gestión de medios materiales y personales del Gobierno Vasco

Pacto de Estado para la reforma de la justicia:

Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios prestados por la administración de justicia.

- Pto. 4: un nuevo mapa judicial.
- Pto. 11: personal al servicio de la administración de justicia.
- Pto. 12: necesidad de reforma de la oficina judicial.
- Pto. 13: necesidad de crear una Carta de Derechos de los Ciudadanos que atienda a principios de transparencia, información y atención adecuada.
- Pto. 19: agilización y rapidez de la justicia.
- Pto. 22: provisión a la CA de medios personales, materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia.

Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia:

Objetivo: satisfacer las expectativas de eficacia y modernización al servicio público de la administración de justicia.

- Creación de oficinas de atención al ciudadano
- Brindar información transparente sobre estado, actividad y asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España.
- Tramitación rápida y eficiente de las dietas de los testigos que se trasladan para prestar declaración.
- Refuerzo e incremento de los servicios de justicia.
- Garantizar la atención en lenguas oficiales.
- Ampliación del horario de trabajo en la oficina judicial.
- Resolución en un mes de las quejas y sugerencias de los ciudadanos.
- Introducción de medios telemáticos.

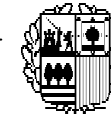
Acuerdo de la Conferencia Sectorial en materia de administración de justicia (Las Palmas de Gran Canaria, 22/05/01):

Objetivo: impulsar acciones tendentes a la consecución de los principios anunciados en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.

- Pto.1: reforma del mapa judicial y reducción de retrasos y dilaciones en la tramitación de los asuntos.
- Pto.2: aprobación de un nuevo Estatuto del personal a su servicio
- Pto.3: nueva legislación que atribuirá a la C.A. la jefatura, organización y gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- Pto.4: reforma de la oficina judicial.
- Pto.5: ampliación de la oficina judicial.
- Pto.6: cooficialidad de las lenguas que conviven en el territorio del estado español.



Competencias	Necesidades de información	Datos
1. Solicitar o impulsar la creación de partidos u órganos judiciales, así como la especialización de órganos (definición de planta y capitalidad)	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de asuntos • Registro de sentencias • Dilaciones • Indicadores de acumulación y saturación (litigiosidad) <p>Tipologías: fases, estados, trámites...</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados) • Fases y fechas • Estados y fechas • Trámites realizados • Comunicaciones • Resoluciones dictadas • Recursos (interpuestos, resultado, ...)
2. Gestión de medios materiales en plantilla de funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> • Productividad en los juzgados <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medios tecnológicos ▪ Material empleado (de oficina, de mantenimiento, gastos fijos, gastos variables...) por oficina judicial • Dotaciones económicas (presupuestos) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentos emitidos ▪ Resoluciones ▪ Recursos ▪ Plantilla



Competencias	Necesidades de información	Datos
3. Posibilitar la tramitación de los procedimientos en los plazos legales previstos ¹	<ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento de plazos	<ul style="list-style-type: none">• Entrada y registro de los asuntos• Fases de los procedimientos y fecha• Estados de los procedimientos y fecha• Asuntos resueltos
4. Impulsar la concordancia entre el expediente físico y el expediente informático de cada uno de los asuntos ²		<ul style="list-style-type: none">• Trámites realizados• Documentos emitidos
5. Mejora continua de la herramienta de gestión procesal ³	<ul style="list-style-type: none">• Verificación de la implementación y uso de los nuevos avances, mecanismos, mejoras...	Esquemas de tramitación implementados (nivel de detalle, flujos de tramitación...)
6. Estudio del uso del euskera en el desempeño diario de los funcionario ⁴	<ul style="list-style-type: none">• Nivel de euskaldunización	<ul style="list-style-type: none">• Documentos emitidos

¹ Segundo Preacuerdo entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las organizaciones sindicales, sobre la modernización en la prestación del servicio público de la justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.

² Ídem.

³ Ídem.

⁴ Segundo Preacuerdo entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las organizaciones sindicales, sobre la modernización en la prestación del servicio público de la justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
7. Plus de retribución a funcionarios (no incluye jueces ni secretarios) ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de plazos procesales • Rendimiento de agentes, oficiales y auxiliares de justicia • Utilización de herramientas informáticas • Cumplimiento de horario • Formación 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos tramitados por funcionario • Documentos emitidos por funcionario • Participación del funcionario en comparecencias, vistas, declaraciones y actos de comunicación
8. Definición y aplicación de indicadores de productividad	<ul style="list-style-type: none"> • Número total de resoluciones dictadas en un período • Número de documentos cuya modificación se ha producido en el último mes • Número de escritos recibidos en un período • Número de intervinientes y profesionales relacionados con los asuntos incoados en un período. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resoluciones • Documentos emitidos • Escritos recibidos • Intervinientes y profesionales • Procedimientos incoados

⁵ Ídem.

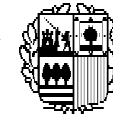


Competencias	Necesidades de información	Datos
	<ul style="list-style-type: none"> Número de procedimientos incoados 	
9. Definición y aplicación de indicadores de gestión ⁶	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de resoluciones Gestión de entradas Gestión de salidas Gestión de vistas y pruebas 	<ul style="list-style-type: none"> Número de Escritos pendientes de tramitar por la Oficina Judicial que hayan superado siete días desde que se lista en el Decanato Número de procedimientos inactivos sin haberse tramitado, descontados los que hayan sido objeto de señalamiento y aquellos que estén pendientes de resolver por el Juez, con un máximo de inactividad de dos meses Número de actuaciones nulas imputables a la oficina judicial Número de recursos de reforma estimados por defecto de forma Número de documentos no registrados informáticamente dentro de los cuatro días hábiles desde su entrada, salvo aquellos pendientes de resolución judicial para su

⁶ Según el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y el acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia celebrada en las Palmas de Gran Canaria en día 22 de Mayo de 2001, que atribuyen a los gobiernos autonómicos que gestionan los recursos de la Administración de Justicia un papel fundamental en la organización de la oficina judicial y en la gestión del personal a su servicio.



Competencias	Necesidades de información	Datos
		<p>registro</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de procedimientos enviados a Fiscalía, archivo central así como diligencias enviadas al SCAC Número de suspensiones de juicios en el propio acto de la vista por causa imputable a la Oficina Judicial
10. Violencia doméstica	<ul style="list-style-type: none"> Agresores (para comprobar la habitualidad) Víctimas (para tomar medidas sobre su protección) Para una mejor resolución de los casos, el Juzgado que conoce un asunto sobre un agresor verá los casos subsiguientes. Asuntos repartidos al amparo de las normas especiales de reparto en materia de violencia doméstica. 	<p>Datos de asuntos sobre violencia doméstica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrados Resueltos Órgano judicial que tramita la causa Medidas cautelares Medidas de protección a la víctima Penas impuestas al agresor Datos de seguimiento de su ejecución <p>Datos de intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agresores Víctimas
11. Dotar al TSJ de una base de datos de calidad para asegurar que la Prevención	<ul style="list-style-type: none"> Las mismas que las expuestas en el apartado correspondiente 	Los mismos que los señalados en el apartado correspondiente del Tribunal Superior de



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
de uso del Sistema Informático pueda ser seguida por este Alto Tribunal	en el apartado correspondiente del Tribunal Superior de Justicia.	Justicia.

3.1.2 Entorno normativo

3.1.2.1 Marco estatutario

Resumen ejecutivo: Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 3/1979)	
Artículo	Interpretación del artículo en este capítulo
Art. 9.2: Los poderes públicos vascos velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.	<i>“...Marca el carácter garante y protector del G. V. para con sus ciudadanos y el principio activo que debe regir la política de sus instituciones.”</i>
Art. 10.5: Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial.	<i>“...Sin duda, la adaptación de este derecho a la realidad social debe contar con una comprensión detallada de su aplicación jurisdiccional.”</i>
Art. 10.14: La organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección, tutela de menores, penitenciarios y reinserción social.	<i>“...La asunción de estas tres funciones debe garantizarse con la información necesaria para asegurar una buena gestión (por ejemplo, un aumento repentino de la criminalidad de los menores de edad, comportaría una nueva proyección de las necesidades de centros para menores y de medios para la reinserción social)...”</i>
Art. 35.2: El órgano competente convocará concursos y oposiciones para el acceso a los puestos de magistrado, juez y secretario.	<i>“...Para garantizar un servicio rápido y efectivo al ciudadano, la C.A. necesitará obtener una imagen fiel de la correspondencia entre plazas necesarias y plazas realmente ocupadas.”</i>
Art. 35.3: corresponderá a la C.A. la provisión del personal al servicio de la administración de justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento.	<i>“...Genera requerimientos de información procesal que rebasan el simple recuento de asuntos por órgano jurisdiccional (por ejemplo, el número de documentos emitidos, que determina las impresoras necesarias y, el volumen de trabajo desempeñado)...”</i>
Art. 35.4: la C.A. y el M.J. mantendrán colaboración para la ordenada gestión de la competencia asumida por el P.V.	<i>“...El establecimiento de protocolos de intercambio de información sobresale como vía para facilitar una relación en ocasiones tensa por la difícil delimitación competencial....”</i>
Art. 10.37: La estadística del P.V. para sus propios fines y	<i>“...El G. V. debe obtener la información necesaria para gestionar los recursos humanos y materiales</i>

**Resumen ejecutivo: Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 3/1979)**

Artículo	Interpretación del artículo en este capítulo
competencias.	<i>de la administración de justicia, así exceda su función administrativa. “</i>

El marco competencial en que puede desempeñar sus funciones el Gobierno Vasco está delimitado, como bien es sabido, por el articulado del Estatuto de Autonomía contenido en la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre. Esta ley contiene tanto los principios rectores como el margen que, en un Estado de las Autonomías, puede llegar a obtener un territorio histórico como el País Vasco.

Considerando el propósito del presente texto, proporcionar al País Vasco un estudio que sirva para delimitar un modelo de explotación estadística, no se puede sino partir de esta ley que delimita y apunta las competencias que pueden ser asumidas por las instituciones vascas de gobierno.

En primer lugar, es necesario trazar el contexto preceptivo que permitirá después interpretar acuerdos y pactos (Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia) referentes al fondo del objeto de este estudio. Así, el primer artículo que dibuja el referido contexto es el 9.2, en donde se especifica que *los poderes públicos vascos velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos*.

Como puede observarse, este artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía marca tanto el carácter garante y protector del Gobierno Vasco para con sus ciudadanos, como el principio activo (*velar*) que debe regir la política de sus instituciones. En esta coyuntura, debe deducirse que el Gobierno Vasco no puede limitarse únicamente a ejecutar las políticas impuestas sino que además debe promover sus propias actuaciones.

En el artículo siguiente, perteneciente al Título I, se anuncian de forma exhaustiva las competencias del Gobierno Vasco, con la intención de recoger las políticas



exclusivas. Es en esta numeración que se encuentran algunas de las competencias en materia de justicia.

Así, como territorio histórico, la Comunidad Autónoma del País Vasco asume, en función del apartado cuarto de este artículo décimo, la *conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial*. Esta atribución requiere un grado de autonomía que se confirma después, con el estudio de los preceptos normativos que afectan a la administración de los recursos materiales, necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia.

En este sentido, se concede al Gobierno Vasco, como se lee en el artículo 10.14, la *organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección, tutela de menores, penitenciarios y reinserción social*. Como se desprende de un literal de esta precisión, la asunción de estas tres funciones debe garantizarse con la información necesaria para asegurar una buena gestión.

Para esclarecer esta afirmación podría citarse, como ejemplo práctico, un aumento repentino de la criminalidad de los menores de edad, algo que comportaría una nueva proyección de las necesidades de centros para menores y de medios para la reinserción social. Detectar a tiempo este aumento de denuncias ha de ayudar sin duda a prevenir situaciones de colapso en estos centros, así como a planificar dichas medidas de reinserción. Igualmente, el retraso o dilación en la resolución de expedientes, puede conllevar un exceso en la carga de trabajo, situación que puede solventarse con la incorporación de personal o con el suministro de nuevos medios materiales de producción (impresoras, ordenadores, escritorios, etc...). Conocer la situación procesal resulta, tal y como se deduce aquí, fundamental para la ordenada gestión de los recursos concedidos en el artículo 10.14 del Estatuto de Autonomía.

Al margen de los puntos a los que se ha hecho referencia para ilustrar las competencias del Gobierno Vasco en materia de Administración de Justicia (y obviando como es lógico la función jurisdiccional atribuida de forma exclusiva al poder judicial), el apartado 37 del artículo 10 del estatuto, indica de una forma simple, precisa y categórica que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la



competencia exclusiva de la estadística del País Vasco *para sus propios fines y competencias*.

Este precepto, pese a su simpleza, requiere una posterior delimitación de su alcance, algo que solo se puede alcanzar mediante un estudio íntegro y profundo de los *fines y competencias* de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de administración de justicia, ya que es este el objeto del presente estudio.

Sobre la base de los preceptos citados y del Capítulo III del Título II, cabe determinar que la estadística debe comprender el ámbito de la Administración de Justicia, puesto que, inequívocamente, la Comunidad Autónoma asume competencias en esta materia.

Del mismo modo, avanzando hasta el capítulo III del Estatuto de Autonomía, en donde se trata específicamente la Administración de Justicia en el País Vasco, el segundo apartado del artículo 35 hace referencia a que, a instancia de la Comunidad Autónoma, *el órgano competente convocará concursos y oposiciones para el acceso a los puestos de magistrado, juez y secretario*.

Para garantizar un servicio rápido y efectivo al ciudadano, la Comunidad Autónoma necesitará obtener una imagen fiel de la correspondencia entre las plazas necesarias y las plazas realmente ocupadas. Es esta una de las necesidades básicas de información que posee la Comunidad Autónoma.

La litigiosidad de los órganos jurisdiccionales constituye, en este caso, uno de los referentes que deben considerarse para determinar el nivel de trabajo asumible por un órgano. La Administración de Justicia, cuando un órgano se encuentra saturado y resuelve muchos menos asuntos de los que ingresa anualmente, debe considerar reforzarlo o crear uno nuevo, que lo libere de parte del trabajo que es incapaz de asumir.

En este sentido, resulta indispensable también fijar la atención en el apartado tercero del artículo 35 del Estatuto, en donde se sostiene que *corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la provisión del personal al servicio de la*



Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento. Este precepto genera requerimientos de información procesal que rebasan el simple recuento de asuntos por órgano jurisdiccional, como el número de documentos emitidos, que determina las impresoras necesarias y, en buena parte, el volumen de trabajo desempeñado. Este caso se reproduce con los actos de comunicación, cuyo volumen determina la dotación de medios para tal fin.

A la luz del artículo 10.37 que otorga la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en cuanto a estadística para sus fines y competencias, puede deducirse que el Gobierno Vasco debe obtener, en la gestión de los recursos humanos y materiales de la administración de justicia, la información necesaria para gestionar dichos recursos, así exceda en ocasiones de su función administrativa.

Fomentando la colaboración para el buen desempeño de las funciones encomendadas, el legislador se anticipa y subraya, en el último apartado (4) del artículo 35 del Estatuto de Autonomía, que *la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Justicia mantendrán la colaboración precisa para la ordenada gestión de la competencia asumida por el País Vasco.*

Parece conveniente mencionar en este punto la Sentencia 1990/56 del T.C.

La indicada Sentencia afirma que “la distinción entre un sentido amplio y un sentido estricto en el concepto de Administración de Justicia tiene valor para distinguir entre”:

- Función jurisdiccional propiamente dicha y ordenación de los elementos intrínsecamente unidos a la determinación de la independencia con que debe desarrollarse.
- Otros aspectos que, más o menos unidos a lo anterior, le sirven de sustento material o personal.

Esta distinción se manifiesta igualmente en las expresiones “Administración de Justicia” y “administración de la Administración de Justicia”.

Dicha distinción tiene gran importancia a los efectos de analizar planteamientos competenciales en el ámbito de la estadística.

3.1.2.2 Demarcación y partidos judiciales en la LOPJ

Resumen ejecutivo: Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 6/85)	
Artículo	Interpretación del artículo en este capítulo
Art. 35.2: La C.A. participará en la demarcación judicial de su territorio, remitiendo al gobierno, a solicitud de este, una propuesta en la que fijará los partidos judiciales.	<i>“El conocimiento fiable y actualizado del grado de saturación, la tasa de resolución y el índice de litigiosidad supone, para la Comunidad Autónoma, la base en la que deben sustentarse dichas propuestas.”</i>
Art. 35.6: la C.A. determinará por Ley la capacidad de los Partidos Judiciales.	<i>“Queda patente de este modo el carácter autónomo con el que se desenvuelve el Gobierno Vasco en cuanto a la valoración de la suficiencia y calidad de los servicios prestados por los órganos judiciales en su territorio.”</i>

Dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial definen nuevas funciones en la participación de la Comunidad Autónoma; estos hacen referencia a la demarcación judicial, un aspecto de la organización judicial sometido a la iniciativa de las Comunidades Autónomas, como se extrae del texto del artículo 35. Se señala que *participarán en la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al gobierno, a solicitud de este, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales.*

Para realizar una propuesta de demarcación acorde a las necesidades del territorio, debe partirse de una información actualizada, completa, recopilada, tratada y expuesta en forma estadística. A tenor de ello y puesto que el Gobierno Vasco asume estatutariamente (Art 10.37 Estatuto de Autonomía del País Vasco) la estadística *para sus propios fines y competencias*, resulta indispensable tener la capacidad de dimensionar el trabajo y la saturación que existe en los distintos partidos judiciales que conforman la Administración de Justicia en el territorio.

La exigencia de nuevos órganos jurisdiccionales, por la acumulación de asuntos o la excesiva dilación en el cumplimiento de sus plazos, cristaliza en las nuevas propuestas de demarcación, competencia del Gobierno Vasco. El conocimiento fiable y actualizado del grado de saturación, la tasa de resolución y el índice de litigiosidad supone, para la Comunidad Autónoma, la base en la que deben sustentarse dichas propuestas.

La descongestión de órganos saturados de trabajo se impone como causa principal de las nuevas propuestas de demarcación. Tanto es así, que únicamente por medio de un flujo de información constante, fiable y actualizada se puede llegar a conocer esta situación (incumplimiento de plazos, demoras injustificables, acumulación de asuntos...) y confeccionar así una propuesta de demarcación en el momento oportuno, que tenga en cuenta la saturación en la carga de trabajo de los órganos de un partido judicial.

Esta visión se refuerza con el apartado sexto del mismo artículo, en donde se atribuye a la Comunidad Autónoma la determinación de la capacidad de los Partidos Judiciales. Queda patente de este modo el carácter autónomo con el que se desenvuelve el Gobierno Vasco en cuanto a la valoración de la suficiencia y calidad de los servicios prestados por los órganos judiciales en su territorio.

3.1.2.3 Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001

Resumen ejecutivo: Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia	
Puntos	Interpretación en este capítulo
4 -un nuevo mapa judicial.	<i>“...las necesidades de información se dirigen hacia un reconocimiento de los puntos de mayor actividad económica, las zonas con signos de conflictividad social, la saturación de los órganos judiciales y una larga serie de indicadores que influirán en el establecimiento de estos nuevos órganos jurisdiccionales.”</i>
11- personal al servicio de	<i>“...Un mayor esfuerzo a la hora de dirigir los recursos</i>



Resumen ejecutivo: Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia	
Puntos	Interpretación en este capítulo
la administración de justicia.	<i>que constituyen la administración de justicia del territorio del País Vasco, implica, paralelamente, una mejora en el acceso a la información acerca del trabajo de dichos funcionarios para poder establecer comparativas y estudios de rendimiento que permitan una gestión eficiente y completa. “</i>
12 - reforma de la oficina judicial.	<i>“...serie de acciones que abarcan todos los ámbitos de la administración de justicia (turno de mañana y tarde, servicios de apoyo directo, monitor de informática y modernización de puestos de trabajo) y que inciden notablemente en la competencia de provisión de personal y de los medios materiales del Gobierno Vasco que el artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco.”</i>
13 - necesidad de crear una Carta de Derechos de los Ciudadanos que atienda a principios de transparencia, información y atención adecuada.	<i>“Al atribuir derechos a los usuarios de los servicios ofrecidos por los órganos jurisdiccionales, impone requerimientos materiales que no pueden obviarse y que demandarán una gestión efectiva por parte de la C.A.”</i>
19 - agilización y rapidez de la justicia.	<i>“...El Gobierno Vasco, debe tomar medidas con base en la información que se desprende del desempeño de los funcionarios en los juzgados (aquella que pueda ayudar a la detección de situaciones anómalas resulta fundamental para la oferta de un servicio ágil y rápido, puesto que constituye la esencia misma del referente que determina dicha agilidad y rapidez.).”</i>
22 - provisión a la CA de medios personales, materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la administración de justicia.	<i>“...En él se aborda específicamente el papel que debe desempeñar la C.A., la que se quiere acercar a los intereses de los ciudadanos.”</i>

Para fomentar la colaboración entre instituciones y promover el buen funcionamiento de los órganos que componen la Administración de Justicia en el Estado, el Gobierno



central y los partidos Popular y Socialista suscribieron en mayo de 2001 el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.

El texto del Pacto delinea las directrices o principios rectores que deben guiar la actuación de las administraciones (en el Ejecutivo Central y en las Comunidades Autónomas) y de los órganos jurisdiccionales, refiriéndose tanto a aquellos que administran la Justicia de forma directa (juzgados, audiencias y tribunales) como a su órgano de gobierno y supervisión (Consejo General del Poder Judicial).

El objeto de este pacto es mejorar la calidad de los servicios prestados por la administración de justicia. Constituye un compromiso de rapidez, eficacia y simplificación de los procedimientos. Bajo esta perspectiva de mejora, el punto cuatro del texto propone un nuevo mapa judicial, un principio que enlaza directamente con la intervención de las Comunidades Autónomas con sus propuestas de demarcación, tal y como se argumenta en el apartado anterior del presente estudio.

En el planteamiento de un nuevo mapa judicial, destaca la promoción de la Justicia de Proximidad (*de manera que haya juzgados más cercanos al ciudadano*). La creación de un nuevo tipo de órgano, con la intención de aligerar el trabajo de los Juzgados de Primera Instancia, se enmarca en la óptica de ampliación de la Administración de Justicia, un proyecto que incluye la redefinición de partidos judiciales, competencia de las Comunidades Autónomas.

Así, con la cooperación de la administración central y de las territoriales, se pretende dibujar un nuevo esquema basado en una mayor especialización de los órganos civiles (juzgados mercantiles y juzgados de familia). En este esfuerzo conjunto, las necesidades de información se dirigen hacia un conocimiento estadístico que aglutine políticas sociales, económicas y, evidentemente, judiciales. Se requerirá entonces reconocer los puntos de mayor actividad económica, las zonas con signos de conflictividad social, la saturación de los órganos judiciales y una larga serie de indicadores que influirán en el establecimiento de estos nuevos órganos jurisdiccionales.



En el punto 11, dentro de la enumeración de principios rectores de la reforma de la justicia, se escribe acerca del personal al servicio de la administración de justicia. Además de la creación de un nuevo estatuto y de la flexibilización de las transiciones entre puestos de la carrera administrativa, se estipula la atribución de una mayor competencia a las Comunidades Autónomas en gestión de personal.

Este incremento de autonomía que se prevé alienta un mayor esfuerzo a la hora de dirigir los recursos que constituyen la administración de justicia del territorio del País Vasco. En este esfuerzo no puede sino intentarse también una mejora en el acceso a la información acerca del trabajo de dichos funcionarios, para poder establecer comparativas y estudios de rendimiento que permitan una gestión eficiente y completa.

Adicionalmente, conviene citar otro punto del Pacto de Mejora que sin duda ha de influir en las necesidades de información y de explotación estadística que corresponden al Gobierno Vasco. Este punto 12, que versa sobre la necesidad de reforma de la oficina judicial, apunta sobre todo una exigencia de modernización que abarque todos los ámbitos de la administración de justicia. Como propuestas concretas, traza una serie de acciones (turno de mañana y tarde, servicios de apoyo directo, monitor de informática y modernización de puestos de trabajo) que inciden notablemente en la competencia de provisión de personal y de los medios materiales del Gobierno Vasco que el artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Como se desprende del párrafo anterior, el Gobierno Vasco es un actor que se halla profundamente implicado y comprometido con la reforma de la justicia y en virtud de ello, tiene unos requerimientos de información que afectan integralmente a todos los ámbitos de la justicia: organización, recursos, funcionamiento, modernización...

En este sentido, el punto siguiente (13), establece la necesidad de crear una Carta de Derechos de los Ciudadanos, que atiende a principios de *transparencia*, *información* y *atención adecuada*. Al atribuir derechos a los usuarios de los servicios ofrecidos por

los órganos jurisdiccionales, impone requerimientos materiales⁷ que no pueden obviarse y que demandarán una gestión efectiva por parte de las Comunidades Autónomas.

El punto 19 de la enumeración de principios para la reforma, hace referencia a la agilización y rapidez de la justicia. Este es un criterio que surge de la garantía de justicia rápida y eficaz que se le debe al ciudadano. En ocasiones, una justicia lenta y que decide con retraso, implica el quebrantamiento, la no-restitución de un derecho o el mantenimiento de una situación injusta. Sobre la base de este pensamiento, las administraciones públicas llevan unos años promoviendo medidas para paliar este defecto y adquirir así agilidad y rapidez.

Por todo ello, el Gobierno Vasco, debe tomar medidas con base en la información que se desprende del desempeño de los funcionarios en los juzgados. Además, debe hacerlo en el momento adecuado y en los términos establecidos por el Estatuto y la LOPJ. De ello se desprende que la información procesal y, de un modo específico, toda aquella que pueda ayudar a la detección de situaciones anormales o de estancamiento de los procesos (asuntos registrados, intervinientes por asunto, asuntos resueltos, actos de comunicación, tasa de saturación...) resulta fundamental para la oferta de un servicio *ágil y rápido*, puesto que constituye la esencia misma del referente que determina dicha agilidad y rapidez.

Este enfoque encuentra sustento también en el punto 22 del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. En él se aborda específicamente el papel que deben desempeñar las comunidades autónomas, a las que se quiere acercar a los intereses de los ciudadanos. Para ello se estipula la *provisión de los medios personales, materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia*.

⁷ El apartado 2.5 “Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia”, trata con detalle cuáles son esas necesidades y qué información exigen para su creación y administración



Por último, los firmantes de este pacto hacen suyos los términos del acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia. Estos términos, y como afectan a la explotación estadística de la Comunidad Autónoma en materia de justicia, puede encontrarse en el apartado siguiente de este documento.

3.1.2.4 Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia

Resumen ejecutivo: Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia	
Puntos	Interpretación en este capítulo
Creación de oficinas de atención al ciudadano. Brindar información transparente sobre estado, actividad y asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España.	<i>“...implica la obligación de gestionar y procesar información procedente de tribunales (tanto referente a los asuntos manejados en ellos como referentes a las visitas que reciben y al personal que atiende en las oficinas de atención al ciudadano) para ofrecerla al ciudadano en la forma que merece...”</i>
Tramitación rápida y eficiente de las dietas de los testigos que se trasladan para prestar declaración.	<i>“...Conlleva la creación de provisiones de fondos y tramitación de pagos. Para efectuar las provisiones presupuestarias es conveniente contar con estadísticas que reflejen el porcentaje de intervención de estos terceros “no interesados” en los juicios...”</i>
Refuerzo e incremento de los servicios de justicia.	<i>“...Representa un aumento del gasto para la creación de nuevas oficinas, formularios, carteles, asistencia de intérpretes, accesos para discapacitados...”</i>
Garantizar la atención en lenguas oficiales.	<i>“...implica la adecuada formación de los funcionarios de justicia que no conozcan la lengua de la C.A.”</i>
Ampliación del horario de trabajo en la oficina judicial.	<i>“...Conlleva la necesidad de dimensionar la plantilla de funcionarios. Dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, influirán en el ritmo de trabajo y el rendimiento de los funcionarios...”</i>
Resolución en un mes de las quejas y sugerencias de los ciudadanos.	<i>“...Conlleva un aumento de la carga de trabajo para los funcionarios de las oficinas judiciales. Una estadística completa que refleje la relación entre las quejas y sugerencias con respecto a la saturación, los procesos de modernización y otras causas diversas,</i>



Resumen ejecutivo: Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia	
Puntos	Interpretación en este capítulo
	<i>revelará medidas de corrección y encauzará la gestión por la vía adecuada.”</i>
Introducción de medios telemáticos.	<i>“...Exige información acerca de las causas y los trámites realizados, puesto que los sistemas de notificación y tomas de declaración que se introducen deberán considerar en qué modelo de datos se acoplan y en que entorno deben desempeñar sus funciones...”</i>

Al margen de los postulados generales que recoge, esta carta de derechos dista mucho de ser meramente genérica. Por el contrario, establece de forma concreta y precisa obligaciones para las administraciones públicas. En ocasiones, estas obligaciones no se anuncian de un modo directo sino que se desprenden de derechos que se otorgan a los ciudadanos.

En este sentido, en el primer epígrafe de la Carta de Derechos, se reclama una justicia moderna y abierta a los ciudadanos. Dentro de esta declaración de intenciones se reconocen dos obligaciones que afectan a las comunidades autónomas: en primer lugar, la creación de oficinas de atención al ciudadano; y por otro lado, el derecho de este *a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España*, que implica la obligación por parte de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Justicia a gestionar y procesar dicha información para ofrecerla al ciudadano en la forma que este merece.

Estos dos mandatos derivan de la necesidad de gestionar información procedente de tribunales, tanto referente a los asuntos manejados en ellos como referentes a las visitas que reciben y al personal que atiende en las oficinas de atención al ciudadano.

Además, para las comunidades autónomas (siempre en función de las competencias asumidas estatutariamente), se especifican otras obligaciones que repercuten de una



forma clara en la gestión y administración de recursos humanos y materiales. Esto sucede en diversos casos. A continuación, se tratan los más relevantes; aquellos que, por su naturaleza, afectan al Gobierno Vasco y a sus necesidades de información:

- Tramitación rápida y eficiente de las dietas de los testigos que se trasladan para prestar declaración. Esto conlleva la creación de provisiones de fondos y la tramitación de los pagos. Para efectuar las provisiones presupuestarias es conveniente contar con estadísticas que reflejen el porcentaje de intervención de estos terceros “no interesados” en los juicios.
- Gran parte de las reformas que, a modo de derechos del ciudadano, son expuestas en la carta, coinciden en el refuerzo e incremento de los servicios de justicia, lo que representa un aumento del gasto para la creación de nuevas oficinas, formularios, carteles, asistencia de intérpretes, accesos para discapacitados... todo esto incide claramente en la administración de recursos, atribuida al Gobierno Vasco, y para la cual su administración debe contar con toda la información disponible.
- Al garantizar la atención en lenguas oficiales, indirectamente, se solicita la adecuada formación de aquellos funcionarios de justicia que desarrollen sus funciones en Catalunya, Galicia, la Comunidad Valenciana, Baleares o el País Vasco y no conozcan la lengua de la Comunidad Autónoma. De la puesta en común de la utilización del Euskera -sobre todo en los documentos emitidos en las oficinas judiciales- con los estudios sociológicos y lingüísticos de la administración autonómica correspondiente, puede obtenerse la información estadística necesaria para fomentar, potenciar o atenuar las medidas de discriminación positiva que se estén empleando.
- La ampliación del horario en el que se debe trabajar en la oficina judicial conlleva la necesidad de dimensionar de nuevo la plantilla de funcionarios. Dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, influirán sin duda en el ritmo de trabajo y el rendimiento de los funcionarios, algo que sin duda debe medirse por el Gobierno Vasco con

los indicadores que sean necesarios. La disección y análisis de la información obtenida facilitarán la planificación de los recursos.

- Igualmente, la resolución en un mes de las quejas y sugerencias de los ciudadanos conllevará un aumento de la carga de trabajo para los funcionarios de las oficinas judiciales. Una estadística completa que refleje la relación entre las quejas y sugerencias con respecto a la saturación, los procesos de modernización y otras causas diversas, revelará medidas de corrección y encauzará la gestión por la vía adecuada.
- La introducción de medios telemáticos exige sin duda información acerca de las causas y los trámites realizados, puesto que los sistemas de notificación y tomas de declaración que se introducen deberán considerar en qué modelo de datos se acoplan y en que entorno deben desempeñar sus funciones. La modernización, como provisión y administración de medios materiales a cargo del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, ha de contar con información estadística previa y por tanto, procesada y estructurada. Esto mismo es aplicable a la implementación de nuevos medios técnicos (localizadores, teleasistencia, traducción al braille, teléfonos de texto, videotexto...), una tarea que se anuncia en esta carta de derechos y que requiere una valoración y un análisis previo sobre la base de información estadística recogida en diversas fuentes. Esta información, tal y como se ha señalado, debe tener un doble origen: procesal y de recursos (materiales y humanos).

3.1.2.5 Acuerdo de la Conferencia Sectorial en materia de administración de justicia celebrada en Las Palmas de Gran Canaria de 22 de mayo de 2001

Resumen ejecutivo: Acuerdo de la Conferencia Sectorial (Las Palmas de Gran Canaria, 22/05/01)	
Puntos	Interpretación en este capítulo

**Resumen ejecutivo: Acuerdo de la Conferencia Sectorial (Las Palmas de Gran Canaria, 22/05/01)**

Puntos	Interpretación en este capítulo
1- reforma del mapa judicial y reducción de retrasos y dilaciones en la tramitación de los asuntos.	<i>“...Se establece una clara necesidad de indicadores geográficos, demográficos y, procesales (índice o volumen de litigiosidad, cantidad de asuntos mercantiles, sociales o estatutarios...)”</i>
2- aprobación de un nuevo Estatuto del personal a su servicio.	<i>“...Se requiere la aprobación de un nuevo Estatuto del personal, puesto que la delimitación competencial agradecería una definición más clara del alcance de las atribuciones de cada uno de los actores..”</i>
3- nueva legislación que atribuirá a la C.A. la jefatura, organización y gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia.	<i>“...Este nuevo marco normativo requerirá un análisis previo de las condiciones del personal a cargo del G.V. (situación laboral, volumen de trabajo, actual régimen legal, escenario político, etc.) De entre todos estos objetos de estudio se distingue como necesidad categórica la información estadística de naturaleza judicial..”</i>
4- reforma de la oficina judicial.	<i>“...Se establecen los pasos necesarios para la modernización de las anquilosadas estructuras de la justicia. Los primeros cuatro principios versan sobre: atención de calidad al ciudadano; modificación de la estructura de la oficina judicial, distinguiendo entre servicios de apoyo directo y servicios comunes; delimitación de las funciones de los integrantes de estos servicios; por último, la modernización de los métodos de trabajo...”</i>
5- ampliación de la oficina judicial. 6- cooficialidad de las lenguas que conviven en el territorio del estado español	<i>“...Requiere un conocimiento profundo y exhaustivo de la realidad social, económica y demográfica del territorio de la C.A., por esta causa, debe recabarse, ordenarse y sistematizarse toda la información que permita trazar estrategias, planes de actuación e incluso, en un plano genérico, políticas de control y supervisión, sin perturbar la función jurisdiccional de las oficinas judiciales y de su órgano de gobierno, el C.G.P.J....”</i>

Representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que han asumido los medios materiales en el área de Justicia,

impulsaron, a través de este acuerdo, las acciones tendentes a la consecución de los principios anunciados en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia.

De nuevo se aborda el criterio de proximidad, que debe constituirse como rector de la actividad de la Administración de Justicia, sea cual sea el actor que la gestione y administre. Con esta perspectiva, se encuentran aquí especificados principios más concretos, de los que derivan actuaciones determinadas. Se reiteran así, con un nuevo empuje, propósitos anunciados anteriormente, como la reforma del mapa judicial y la reducción de los retrasos y dilaciones en la tramitación de los asuntos.

En lo concerniente a la explotación estadística, tal y como se indicó en el apartado que resumía las necesidades de información del gobierno vasco en el Pacto de Estado para la Reforma, estos dos principios afectan directamente los requerimientos estadísticos del Gobierno Vasco.

La reforma del mapa judicial, que concibe nuevas demarcaciones, nuevos órganos especializados (juzgados civiles y juzgados mercantiles) y una separación más flexible de las jurisdicciones Civil y Penal, establece una necesidad clara de conocimiento de indicadores geográficos, demográficos y, como se apunta en el texto del pacto, procesales (*índice o volumen de litigiosidad*, cantidad de asuntos mercantiles, sociales o estatutarios...).

En el esfuerzo conciliador que se aprecia, se trazan dos acciones primordiales para aportar cohesión a la relación institucional entre la Administración Central y las Autonómicas en materia de justicia. Así, primero se requiere la aprobación de un nuevo Estatuto del personal a su servicio, puesto que la delimitación competencial agradecería una definición más clara del alcance de las atribuciones de cada uno de los actores. En segundo lugar, se aclara que la nueva legislación atribuirá a las Comunidades Autónomas *la jefatura, la organización y la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia sobre el que tienen asumidas competencias, sin perjuicio de la dirección técnica y procesal que corresponderá a los Secretarios Judiciales o, en su caso, a jueces, tribunales y fiscales.*



El punto cuarto profundiza acerca de la reforma de la oficina judicial. Se establecen los pasos necesarios para la modernización de las anquilosadas estructuras de la justicia. Los primeros cuatro principios versan sobre: atención de calidad al ciudadano; modificación de la estructura de la oficina judicial, distinguiendo entre servicios de apoyo directo y servicios comunes; delimitación de las funciones de los integrantes de estos servicios; por último, la modernización de los métodos de trabajo. Todos ellos dejan patente cómo se reflejan los principios esbozados en el Pacto de Estado.

Refiriéndonos ahora de forma específica a la explotación estadística que subyace en la toma del mando organizativo de los medios humanos y materiales, son los puntos quinto y sexto los que se refieren de un modo más concreto a las funciones de los gobiernos de las Comunidades Autónomas. El punto quinto anuncia la ampliación de la oficina judicial, *que estará sujeto a la flexibilidad organizativa y creadora de la Comunidad Autónoma en su respectivo ámbito judicial*. El punto sexto insiste en la cooficialidad de las lenguas que conviven en el territorio del estado español.

Ambos preceptos configuran una realidad plural a la vez que apuntan objetivos que los gobiernos autonómicos pueden alcanzar. La consecución de estos solo puede resolverse por medio de un conocimiento profundo y exhaustivo de la realidad social, económica y demográfica del territorio de la Comunidad Autónoma.

Por esta causa, debe recabarse, ordenarse y sistematizarse toda la información que permita trazar estrategias, planes de actuación e incluso, en un plano genérico, políticas de control y supervisión, sin perturbar la función jurisdiccional de las oficinas judiciales y de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

Corroborando la visión correctora y modernizadora del Pacto para la Reforma, el acuerdo de la Conferencia Sectorial establece la creación de una Comisión de Cooperación Tecnológica, consciente de la importancia que juega la renovación tecnológica, integrando a las Administraciones Autonómicas y al Consejo General del Poder Judicial en un órgano que verifique y encauce el proceso de informatización en las oficinas judiciales.

3.1.2.6 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Es necesario hacer un inciso sobre la previsión que esta Ley Orgánica fija en materia estadística.

En su artículo 461 se regula tanto la estadística judicial como aquellas otras explotaciones que sirvan de instrumento para llevar a término una gestión eficaz. Asimismo se establece la necesaria coordinación entre los actores implicados: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

El apartado 3 del artículo mencionado establece que *“Las Administraciones Públicas y el Consejo General del Poder Judicial dispondrán de información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada, facilitándose la obtención, tratamiento y transmisión de datos estadísticos a través del sistema tecnológico que se habilite al efecto”*.

Asimismo, en su apartado 4 se establece: *“No obstante, las Administraciones Públicas con competencias en materias de Administración de Justicia podrán llevar a cabo las explotaciones de otros datos estadísticos que puedan ser recabados a través de los sistemas informáticos, siempre que se consideren necesarias o útiles para su gestión”*.

Queda claro que el espíritu de la reforma avanza en el sentido de dotar a las Administraciones competentes de los mecanismos necesarios para la “producción estadística”.

3.1.2.7 Prevención sobre el uso del Sistema Informático dictada por el TSJ del País Vasco

El 23 de Abril de 1.999 se aprobó por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del país Vasco una prevención sobre el uso del sistema informático de gestión procesal implantado en la Administración de Justicia del País Vasco.

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, como proveedor de este sistema informático dentro de sus competencias de dotación de medios materiales, asume la responsabilidad de ofrecer una base de datos con contenidos de calidad, con el objetivo de que desde el Tribunal Superior se pueda realizar un correcto seguimiento de dicha prevención.

Por lo tanto, y para poder ofrecer medidas correctoras en base a la calidad de la información de la base de datos, el Departamento de Justicia deberá poder acceder a la misma información que se reclama desde la propia Prevención.

3.2 Otros actores implicados

3.2.1 Tribunal Superior de Justicia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realiza anualmente una memoria de la actividad desempeñada por el propio tribunal y por todos los órganos judiciales dentro de su jurisdicción. Esta memoria se eleva después al Consejo General del Poder Judicial, que la revisa y evalúa así su actividad.

La memoria contiene un reporte del movimiento procesal, con una relación de las actividades jurisdiccionales y otras conexas, como las desempeñadas por el IVML o por la Policía Autonómica. Tampoco deja al margen las medidas adoptadas para, según la memoria, *evitar dilaciones procesales indebidas y actualizar el funcionamiento de los órganos judiciales que requerían una contribución de este carácter.*

Se revisan además otros aspectos como los medios materiales y personales de la administración de Justicia del País Vasco, la formación de los funcionarios, el nivel de euskaldunización, la seguridad en las oficinas judiciales y la Justicia de Paz. Como se desprende de la profundidad del análisis, el TSJ requiere abundante información, que



obtiene principalmente del sistema de gestión procesal. Las instituciones no jurisdiccionales, por el contrario, deben contar con un protocolo de comunicación.

Puesto que el buen uso del sistema de gestión procesal determina la calidad de la información recibida, el Tribunal Superior de Justicia estudia su explotación, evaluando con detalle la emisión de documentos, la identificación de los intervinientes, la numeración de los procedimientos y los fallos en el registro de asuntos y escritos. Estos son los principales aspectos recogidos en la “Prevención sobre el uso del sistema informático” aprobada por la Sala de Gobierno del TSJ el 23 de Abril de 1.999.

A continuación, se desglosan las dos competencias principales que vinculan al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la explotación estadística de la administración de justicia:



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Elaboración de la memoria	<ul style="list-style-type: none"> Detalle de cada jurisdicción Estadísticas de reparto Productividad Movilidad del personal Gastos Variación Actividad de SCRED Ejecuciones de pena Inspecciones Actividades del Instituto Vasco de Medicina Legal Avance de la normalización Personal en la administración de justicia Gestiones de la Policía Judicial 	<ul style="list-style-type: none"> Sentencias y autos Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados) Juicios por jurado Documentos registrados Tomas de posesión Comisiones recibidas y resultado positivo Órganos inspeccionados Fechas de inspecciones Patologías tratadas Actividad Auxilio de traductores en juicios y declaraciones Escritos traducidos Cambios de residencia Número de gestiones y resultado



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
		<p>positivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tareas resueltas (por tipos) • Oficios recepcionados, asumidos y no asumidos • Detenidos • Delitos • Dinero recuperado • Efectos incautados • Vehículos intervenidos • Droga decomisada

Prevención de uso del sistema informático

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Evaluación del registro en las oficinas judiciales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escritos presentados / asuntos en los que se ha realizado algún trámite durante el período. ▪ Porcentaje de escritos en los que no se identifica el interviniente 	<ul style="list-style-type: none"> • Escritos recibidos • Intervinientes • Trámites realizados



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
	<p>interviniente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Porcentaje de escritos en los que no se identifica el órgano judicial y procedimiento destino. ▪ Porcentaje de escritos pendientes de proveer entrados en el mes anterior 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos • Órganos judiciales
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Porcentaje de intervinientes que se identifican como parte activa ▪ Porcentaje de intervinientes que se identifican como parte pasiva ▪ Porcentaje de intervinientes que se identifican como no-parte ▪ Porcentaje de intervinientes y/o profesionales que poseen un número de identificación personal (NIP) automático ▪ Porcentaje de intervinientes y/o profesionales que tienen alguna carencia en el registro. ▪ Porcentaje de intervinientes que tienen registrado abogado. ▪ Porcentaje de intervinientes que tienen registrado procurador. ▪ Número de “huecos” en la numeración. 	



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Número de registros duplicados. Desordenes entre fechas y números. Número de veces que se ha ejecutado un programa concreto o conjunto de ellos, en un período determinado. 	
2. Supervisión del uso de la agenda por parte de los funcionarios judiciales	<ul style="list-style-type: none"> Apuntes realizados en la agenda de señalamientos en un período. Apuntes realizados en la agenda, en un período. 	<ul style="list-style-type: none"> Apuntes Señalamientos
3. Revisión de los actos de comunicación de las oficinas judiciales	<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de documentos terminados en los que se ha activado el control de la notificación. Porcentaje de documentos terminados en los que se ha cumplimentado el resultado de la notificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos terminados Fases y fechas Trámites
4. Evaluación del uso de documentos estandarizados y esquemas de tramitación	<ul style="list-style-type: none"> Evolución del porcentaje de utilización de los esquemas de tramitación, con respecto al período anterior. Porcentaje de texto libre en los documentos creados durante el período. Porcentaje de documento normalizado en los documentos creados durante el período. Número de documentos creados durante el período. Número de documentos creados dentro de los 3 meses anteriores. 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos (creados, normalizados, emitidos...) Trámites Documentos (en elaboración, terminados,...) Procedimientos (en trámite, suspendidos, terminados, archivados) Fases y fechas



Competencias	Necesidades de información	Datos
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Número de documentos creados antes del trimestre. ▪ Porcentaje de documentos en elaboración cuya fecha de creación está en el período. ▪ Porcentaje de documentos en elaboración cuya fecha de creación está dentro de los 3 meses anteriores. ▪ Porcentaje de documentos en elaboración cuya fecha de creación es anterior al trimestre. ▪ Porcentaje de documentos terminados cuya fecha de creación está en el mismo período. ▪ Porcentaje de documentos terminados cuya fecha de creación está dentro de los 3 meses anteriores. ▪ Porcentaje de documentos terminados cuya fecha de creación es anterior al trimestre. • Porcentaje de procedimientos cuyo último procedimiento se ha realizado dentro del período. • Porcentaje de procedimientos cuyo último movimiento se ha realizado dentro del año anterior. • Porcentaje de procedimientos cuyo último movimiento se ha realizado con anterioridad al año. <p>Cambio de etapas de los procedimientos:</p>	



Competencias	Necesidades de información	Datos
	<ul style="list-style-type: none"> Número de cambios entre etapas (ordenación, decisión y ejecución). <p><u>Archivo de los procedimientos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de procedimientos que, en el período, hayan pasado a estado de terminación y hayan sido remitidos al archivo central. 	
5. Evaluación de la función jurisdiccional, según criterios de tramitación, calidad y dilación	<ul style="list-style-type: none"> Número de sentencias registradas usando el módulo específico de tratamiento de las resoluciones. Número de autos registrados usando el módulo específico de tratamiento de las resoluciones. Porcentaje de procedimientos cuya fecha de entrada en la etapa está en el período. Porcentaje de los procedimientos cuya fecha de entrada en la etapa está dentro de los 3 meses anteriores. Porcentaje de los procedimientos cuya fecha de entrada en la etapa es anterior al trimestre. Porcentaje de resoluciones dictadas que tienen alguna carencia en el registro (fecha de dictado, fecha de certificación, fecha de firmeza, indicación de recurso, tipo de resolución del recurso, fecha de resolución del recurso, indicativo de resolución calificada, indicativo de 	<ul style="list-style-type: none"> Resoluciones (sentencias, autos) Asuntos Fase y fecha Procedimientos terminados



Competencias	Necesidades de información	Datos
	<p>resolución de interés).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Porcentaje de no cumplimentación de los datos tipificados.▪ Porcentaje de no cumplimentación del fallo de la resolución.	

3.2.2 OVAJ

El Observatorio Vasco de la Administración de Justicia (OVAJ) fue creado según el Decreto 81/2001 del 8 de mayo, como un órgano consultivo de asesoramiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

Se configura como un foro de investigación, debate, análisis y propuestas de actuación, cuyos miembros son representantes de las siguientes instituciones:

- Asociación de Jueces de Paz del País Vasco
- Colegio de Procuradores
- Consejo General del Poder Judicial
- Consejo Vasco de la Abogacía
- Departamento de Interior del Gobierno Vasco
- Dirección de Estudios y Régimen Jurídico de la Viceconsejería de Justicia
- Dirección de Derechos Humanos de la Viceconsejería de Justicia
- Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco
- EMAKUNDE- Instituto Vasco de la Mujer
- Equipos Psicosociales Judiciales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
- EUSTAT- Instituto Vasco de Estadística
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU
- Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU
- Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto



- Facultad de Derecho de la UPV/EHU
- Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
- Instituto Internacional de Sociología Jurídica
- Instituto Vasco de Criminología
- Instituto Vasco de Medicina Legal
- Sindicatos

Con la intención de realizar un análisis intensivo de la realidad jurisdiccional, el OVAJ se constituyó como instrumento para la compilación de información judicial, para participarla en forma estadística a todos los actores que se dedican a la interpretación y análisis del estado de la justicia en el País Vasco, ya sean instituciones educativas, sociales o administrativas.

La complejidad de los indicadores recomendados por el OVAJ hace necesaria la obtención de información muy detallada, que incluye índices de litigiosidad, pendencia y otras muestras del rendimiento y de la producción de los órganos judiciales, como se ilustra en las siguientes tablas. Para simplificar su presentación las necesidades de información han sido agrupadas por tipos de indicadores:



Indicadores de proceso: los cuales pueden ser de actividad o de calidad, según sea cuantitativos o cualitativos

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Medición del volumen de actividad, con el propósito de reflejar la litigiosidad según criterios geográficos y con comparativas interanuales.	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de registro • Tasa de resolución • Tasa de pendencia • Media de asuntos registrados por órgano • Media de asuntos resueltos por órgano • Media de asuntos pendientes por órgano 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados) • Órganos • Jurisdicciones • Poblaciones
2. Valoración del impacto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil	<ul style="list-style-type: none"> • Volumen de asuntos registrados, resueltos y pendientes 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados)
3. Estimación del servicio prestado por el turno de oficio y por el Servicio de Orientación Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de peticiones planteadas a los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados (SOJ) que incoan procedimiento • Cantidad de peticiones planteadas a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (CAJ) que incoan procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Peticiones planteadas al SOJ • Procedimientos registrados como justicia gratuita en el SOJ • Peticiones planteadas a las CAJ • Resoluciones de las CAJ con beneficio de justicia gratuita



Competencias	Necesidades de información	Datos
		<ul style="list-style-type: none"> • Impugnación de expedientes en las CAJ.
4. Evaluación de la conformidad de las partes con respecto a las resoluciones dictadas. Se comprueba también la validez o fiabilidad de los tribunales inferiores.	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de apelación⁸ • Tasa de revocación⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos presentados • Resoluciones por asunto • Revocaciones • Revocaciones resueltas
5. Valoración de tiempos de duración y cumplimiento de plazos con el objeto de determinar las causas de la dilación de la justicia	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de duración del procedimiento • Duración media de los procedimientos que terminan en sentencia • Duración de ejecución de los casos de faltas y delitos • Cómo eliminar las causas de suspensión motivadas por cuestiones ajenas al procedimiento • Cumplimiento de plazos legales • Comparación de tiempos reales 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados) • Fase y fecha • Estado y fecha • Faltas y delitos • Trámites y fechas

⁸ Proporción de recursos presentados respecto a los asuntos resueltos por sentencia en el año.

⁹ Proporción de causas revocadas respecto al número de apelaciones resueltas en el año.

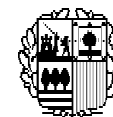


Competencias	Necesidades de información	Datos
	registrados por los órganos y tiempos teóricos de tramitación para estudiar potenciales desviaciones y los factores que las causan.	
6. Apreciación del servicio de atención a la ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> Consultas y quejas recogidas por los distintos servicios 	<ul style="list-style-type: none"> Consultas Quejas
7. Evaluación de la premura del Servicio Médico Forense	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo desde que se determina la necesidad de comparecencia en el IVML hasta que se hace efectiva la visita 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios IVML Fechas Dictámenes
8. Comprobación de la efectividad de la jurisdicción social por medio de la divergencia entre la resolución judicial y su ejecutabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Tasa de ejecutabilidad¹⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> Expedientes FOGASA Ejecuciones resueltas en el orden social Declaraciones de insolvencia emitidas

Indicadores de recursos humanos

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Dimensión de los recursos humanos empleados.	<ul style="list-style-type: none"> Datos oficiales y reales, personal sustituto, interino 	<ul style="list-style-type: none"> Personal contratado Tipología del contrato
2. Valoración de la distribución demográfica de la justicia	<ul style="list-style-type: none"> Proporción de profesionales de la justicia por 100.000 habitantes 	<ul style="list-style-type: none"> Jueces y Magistrados Secretarios judiciales Personal transferido Fiscales Procuradores Abogados Otros agentes jurídicos
3. Evaluación del perfil lingüístico de los funcionarios de justicia	<ul style="list-style-type: none"> Nivel de euskaldunización por colectivos 	<ul style="list-style-type: none"> Personal contratado Tipología del contrato
4. Estimación del envejecimiento de los trabajadores de la Administración de Justicia	<ul style="list-style-type: none"> Edad media por colectivos 	<ul style="list-style-type: none"> Personal contratado Edad

¹⁰ Porcentaje de expedientes de FOGASA partido por el número de ejecuciones resueltas en la jurisdicción social



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
5. Determinación del nivel de formación	<ul style="list-style-type: none"> • Cursos de formación por colectivos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cursos • Asistencia • Colectivos • Categoría profesional de los asistentes • Instituciones organizadoras
6. Valoración de la modernización y avance tecnológico de la Administración de Justicia	<ul style="list-style-type: none"> • Puestos de trabajo informatizados • Formación • Inversión 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminal informático • PC's • Categoría profesional • Personas formadas en informática • Cursos de informática impartidos • Coste de equipos • Coste de cursos

Indicadores de planta

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
---------------------	-----------------------------------	--------------



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Resumen de la planta judicial	<ul style="list-style-type: none"> Número de órganos por jurisdicción, instancia, partido judicial y territorio 	<ul style="list-style-type: none"> Órganos
2. Número de empresas y su relación con el nivel de litigiosidad	<ul style="list-style-type: none"> Número de empresas / 1000 habitantes Número de trabajadores / empresa Número de asuntos / empresa Número de asuntos / trabajador 	<ul style="list-style-type: none"> Intervinientes Asuntos registrados Empresas domiciliadas Trabajadores por empresa

Indicadores de costes

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Estimación de la evolución de la inversión en materia de justicia	<ul style="list-style-type: none"> Gasto público en justicia (Obligaciones reconocidas y liquidadas) 	<ul style="list-style-type: none"> Gastos de personal Gastos de funcionamiento Transf. y Subv. Gastos Inversiones reales Transf. y subv. Operaciones Variaciones de activos
2. Determinación del coste relativo	<ul style="list-style-type: none"> Coste medio del proceso por habitante 	<ul style="list-style-type: none"> Habitantes



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
del proceso judicial	<ul style="list-style-type: none"> Coste medio del proceso por asunto ingresado Coste medio del proceso por asunto resuelto 	<ul style="list-style-type: none"> Asuntos (ingresados, resueltos...) Coste del proceso
3. Valoración del los servicios de asistencia: SAOS y SAV	<ul style="list-style-type: none"> Asistencia al detenido (SAOS) Asistencia a la víctima (SAV) 	<ul style="list-style-type: none"> Personas atendidas Atenciones por equipo profesional: <ul style="list-style-type: none"> Tipo de asistencia SAV Tipo de atención SAOS

Indicadores de criminalidad

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Estimación de los niveles de criminalidad	<ul style="list-style-type: none"> Número de personas condenadas judicialmente Número de personas imputadas Número de delitos denunciados 	<ul style="list-style-type: none"> Delitos Condenas Intervinientes
2. Determinación de la población penitenciaria adulta total	<ul style="list-style-type: none"> Población preventiva y penada por centro penitenciario 	<ul style="list-style-type: none"> Centros penitenciarios



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
	<ul style="list-style-type: none">Relación de la población penitenciaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi con el Estado	<ul style="list-style-type: none">CondenasPresos preventivos:<ul style="list-style-type: none">Total del EstadoTotal C.A. de Euskadi

Justicia de Menores

<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Estimación de la evolución de las medidas sancionadoras	<ul style="list-style-type: none">Menores sancionados e internados	<ul style="list-style-type: none">MedidasIntervinientesCentros de internamiento

3.2.3 EUSTAT

El Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) es el organismo público del País Vasco encargado de recoger, analizar y difundir la información estadística sobre todos los aspectos de la sociedad y la economía vasca. Fue creado por el Parlamento Vasco en Abril de 1986, como un organismo autónomo de carácter administrativo, con la finalidad de enmarcar y racionalizar la actividad estadística de la Comunidad Autónoma.

La Ley Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi atribuye al EUSTAT dos funciones primordiales: la primera hace referencia al diseño, planificación y elaboración de estadísticas en el seno de la Comunidad Autónoma de Euskadi; en segundo lugar, se concede a este organismo una función representativa en materia estadística, nacional e internacionalmente.

Con relación a las operaciones estadísticas que conforman los Programas estadísticos anuales y los planes estadísticos, corresponde a este organismo la aprobación del proyecto técnico que plantea cada operación estadística. De la misma forma, también se atribuye al EUSTAT la dirección y coordinación de la actuación estadística, lo que incluye elaborar las estadísticas encomendadas por los planes y programas, así como publicar y difundir los resultados estadísticos obtenidos.

Dentro de esta función estadística, confiere al EUSTAT, el establecimiento, implantación y posterior mantenimiento de la base de datos estadísticos de la Comunidad Autónoma. En el ámbito tecnológico, también se transmiten competencias para mantener los sistemas integrados de estadísticas demográficas económicas y sociales.



Competencias	Necesidades de información	Datos
1. Revisión de las políticas sociales (matrimonios, separaciones y divorcios)	<ul style="list-style-type: none"> Familias por ámbito territorial según tipo y tamaño medio. Media de personas por familia, por ámbito territorial. Núcleos familiares por ámbito territorial, según el tipo de núcleo. Matrimonios existentes en la actualidad por Comunidad Autónoma de nacimiento de los cónyuges, según el grado de homogamia (miles de personas). Matrimonios existentes en la actualidad por lugar de nacimiento de los cónyuges, según el grado de homogamia (miles de personas). Matrimonios existentes en la actualidad por año de matrimonio, según el lugar de nacimiento de los cónyuges y el grado de homogamia (miles de personas). Diferencia media de edad entre los cónyuges por año de matrimonio. Matrimonios existentes en la actualidad por nivel de instrucción de los cónyuges, según el grado de 	<ul style="list-style-type: none"> Matrimonios <ul style="list-style-type: none"> -Según población -Según territorios históricos -Según edad -Según nacimiento -Según instrucción -Según tipo de núcleo -Según año de celebración Divorcios y separaciones según causas de decohabitación



Competencias	Necesidades de información	Datos
	<p>homogamia (miles de personas).</p> <ul style="list-style-type: none"> Duración media de la cohabitación de los hijos nacidos en el matrimonio "partidos" por el sexo y el año de la partida, según la causa de la decohabitación. Primeros matrimonios por año de matrimonio, según el momento del ciclo familiar (miles de matrimonios). 	
2. Exposición de la planta judicial y de la labor jurisdiccional de la Comunidad Autónoma	<ul style="list-style-type: none"> Demarcación y planta judicial: Actividad de la Administración de Justicia Juzgados de Menores. Población Reclusa. 	<ul style="list-style-type: none"> Juzgados y tribunales Asuntos (registrados, pendientes al inicio, ingresados, reiniciados, resueltos, acumulados) Órganos (TSJ, Audiencias Provinciales, J. instrucción, J. Primera Instancia e instrucción, J. Primera Instancia con familias, J. Primera Instancia sin familias, J. de lo Contencioso Administrativo, J. de lo Social, J. de lo Penal, J. de Familia, J. de Vigilancia Penitenciaria)

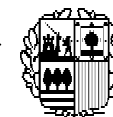
3.2.4 Servicio de Justicia Juvenil de la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia

La ejecución de las medidas y la planificación del proceso de optimización de la respuesta a los adolescentes y jóvenes infractores recae en la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia.

Algunas de las funciones asignadas al Servicio, son las siguientes:

- Ejecutar las medidas firmes y cautelares dictadas por los juzgados de Menores
- Crear, organizar, dirigir y gestionar los centros, servicios y programas necesarios para ejecutar las medidas
- Asistir a las comparecencias de medidas cautelares
- Prestar el servicio de guardia de localización durante todo el año
- Asistir a las audiencias y comparecencias que los Juzgados de Menores determinen
- Realizar, valorar, informar sobre los supuestos de desistimiento, modificación, sustitución, suspensión, dejar sin efecto, de cualquier medida
- Mantener la base de datos de Justicia Juvenil
- Mantener el archivo de los expedientes personales de cada uno de los menores
- Informar a Jueces y Fiscales de Menores sobre la ejecución de cada medida. Informar, en su caso, al Ararteko, Defensor del Pueblo y abogado del menor
- Crear, mantener, supervisar, etc. La red de Centros Educativos para el cumplimiento de las medidas de internamiento
- Aplicar y controlar los procedimientos sancionatorios
- Planificar y llevar a cabo las acciones formativas necesarias con los profesionales de la red de Justicia Juvenil

- Mantener cauces de coordinación permanentes con los Jueces y Fiscales de Menores
- Realizar los estudios e investigaciones necesarios en este ámbito
- Coordinar las actuaciones con la red sanitaria, educativa, formativa y de Servicios Sociales. Realizar protocolos de actuación
- Mantener la coordinación con los Equipos Psicosociales de apoyo a los Juzgados y Fiscalías de Menores. Elaborar protocolos comunes de actuación
- Plantear propuestas de desarrollo normativo de la legislación en la materia
- Proponer, seguir y controlar el presupuesto del Servicio
- Supervisar, controlar y unificar el funcionamiento de los servicios de gestión indirecta
- Potenciar la participación de las entidades públicas y privadas en la ejecución de las medidas. Realizar convenios de colaboración
- Representar al Departamento en los diferentes foros existentes: Ministerio de Justicia, Asuntos Sociales, Congresos del Menor, Poder Judicial, Fiscalías, etc.
- Otras, a juicio del Departamento



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
1. Ejecución de medidas y relación con Juzgados, Fiscalías y equipos técnicos de psicólogos en esta materia	<ul style="list-style-type: none">Datos sobre resoluciones (sentencias y medidas cautelares)	<ul style="list-style-type: none">FallosMedidasFicha del menor (nombre, edad...)Datos psicosociales (nacionalidad, entorno...)Orden de ejecuciónDatos de seguimiento de la ejecución (fecha de inicio, centro...)

3.3 Consejo General del Poder Judicial

3.3.1 Necesidades de información

El C.G.P.J. es el órgano de gobierno del Poder Judicial, autónomo y con competencia en todo el territorio nacional. Como tal, es cometido principal del CGPJ velar por la garantía de la independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les son propias.

Ahora bien, el CGPJ, pese a ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, no es un órgano jurisdiccional ni toma decisiones de fondo sobre los procedimientos abiertos. El CGPJ no participa de la función jurisdiccional, constitucionalmente reservada a los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial, siendo el Tribunal Supremo el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes con jurisdicción en toda España; y los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia los órganos jurisdiccionales que culminan la organización judicial en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma.

Dentro de la competencia para la elaboración de **estadísticas judiciales**, el Consejo General del Poder Judicial se ha dotado ya de los mecanismos y herramientas informáticas que permiten una explotación de los datos. El sistema se basa en la cumplimentación, por parte de los Secretarios Judiciales, de los boletines estadísticos diseñados según la tipología de los órganos judiciales.

También englobamos en este apartado las necesidades inherentes a la inspección de Juzgados y Tribunales, así como las competencias de control que el CGPJ asume a partir del código de conducta, Ley de retribuciones, etc.



Competencias	Necesidades de información	Datos
1. Elaboración anual de las estadísticas judiciales.	<p>Boletines de Estadísticas del C.G.P.J. completados trimestralmente por los Secretarios de los distintos órganos judiciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Audiencia Provincial Civil. Audiencia Provincial Penal. Juzgado de lo Social de Ejecuciones. Juzgado de Menores. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Juzgado Penal de Ejecutorias. Juzgado de Instrucción. Juzgado de lo Contencioso. Juzgado de lo Penal. Juzgado de lo Social. Juzgado de Primera Instancia con Familia. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. 	<ul style="list-style-type: none"> Asuntos: (según materia o tipo de procedimiento) <ul style="list-style-type: none"> Entrados Reiniciados Resueltos (según motivo) Pendientes (al inicio y al final del período) Fase del procedimiento y fecha inicio fase Estado del procedimiento y fecha de inicio del estado Intervinientes: <ul style="list-style-type: none"> Datos de intervención Estado y fecha Juicios: <ul style="list-style-type: none"> Juicios señalados Juicios pendientes Juicios celebrados Juicios suspendidos Otros señalamientos:



Competencias	Necesidades de información	Datos
	<ul style="list-style-type: none"> Juzgado de Primera Instancia sin Familia. Juzgada de Primera Instancia solo Familia. Servicios Comunes Actos de Comunicación. TSJ Sala Civil y Penal TSJ Sala Contencioso Administrativa TSJ Sala de lo Social 	<ul style="list-style-type: none"> - Señalados - Celebrados - Suspendidos • Exhortos: <ul style="list-style-type: none"> - Entrados - Reiniciados - Resueltos (según motivo) - Pendientes (al inicio y al final del período) - Fase y fecha inicio fase - Estado y fecha de inicio del estado • Resoluciones que ponen fin al procedimiento: (sentencias y autos) <ul style="list-style-type: none"> - Ponencias - Dictadas - Oposición - Datos del fallo (condenatorio, absolutorio, estimatorio, desestimatorio,...) - Medidas y penas impuestas en el fallo. - Transcritas (caso de OC que transcribe sentencias)



Competencias	Necesidades de información	Datos
		<ul style="list-style-type: none"> Recursos: <ul style="list-style-type: none"> Estados y fechas Datos sobre el resultado (confirmando, anulando,...) Interpuestos Tipo de recursos. Ejecuciones: <ul style="list-style-type: none"> Entradas Estado y fecha Intervinientes Causas con preso Penas (tipo y clase de pena) Medidas para menores (tipo y clase de medida) Actos de comunicación: <ul style="list-style-type: none"> Tipología Entrados Resueltos Tiempo de realización Signo de la diligencia (positivas, negativas) Escritos:



Competencias	Necesidades de información	Datos
		<ul style="list-style-type: none"> - Entrados - Pendientes de proveer
2. Inspección e inspección ON LINE: el C.G.P.J., a través el Servicio de Inspección, posee la funciones de control y comprobación del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y el cumplimiento de los deberes del personal judicial ¹¹ .	<p>Toda la información procesada en los órganos judiciales referente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asuntos • trámites • documentos emitidos • resoluciones • ejecuciones 	<p>Toda la información procesada en los órganos judiciales referente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asuntos (entrados, resueltos, tipos de procedimientos incoados, fase, estado, ...) • trámites realizados • documentos emitidos • Datos sobre resoluciones (sentido del fallo, penas y medidas impuestas, ...) • Ejecuciones (registradas, resueltas, datos sobre las penas y medidas a ejecutar, ...).
3. Módulos por productividad	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano judicial (módulos de entrada) • Fijar rendimientos orientativos de jueces y magistrados (módulos de ...) 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de asuntos entrados según peso. • Número de sentencias dictadas • Cuestiones varias (medidas disciplinarias, cambios de destino, bajas por maternidad, licencias por estudio, jubilaciones, etc)

¹¹ Art-161.1 de la L.O.P.J.



Competencias	Necesidades de información	Datos
	salida o dedicación)	<ul style="list-style-type: none"> Tiempo absoluto de dedicación anual (incluida formación) Tiempo neto de dedicación a la pura función judicial <p>Tiempo de dedicación a actividades no baremadas (ejecución de sentencias, jurisdicción voluntaria, atención profesionales, atención particulares, atención oficina judicial, deliberación, vistas, etc)</p>
Violencia doméstica	<ul style="list-style-type: none"> Agresores (para comprobar la habitualidad) Víctimas (para tomar medidas sobre su protección) Para una mejor resolución de los casos, el Juzgado que conoce un asunto sobre un agresor verá los casos subsiguientes. Asuntos repartidos al amparo de las normas especiales de reparto en materia de violencia doméstica. 	<p>Datos de asuntos sobre violencia doméstica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrados Resueltos Órgano judicial que tramita la causa Medidas cautelares Medidas de protección a la víctima Penas impuestas al agresor Datos de seguimiento de su ejecución <p>Datos de intervinientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Agresores víctimas
5. Establecimiento de responsabilidades.	<ul style="list-style-type: none"> Formulas de reparación del daño por funcionamiento anormal de los 	<ul style="list-style-type: none"> Quejas



Competencias	Necesidades de información	Datos
prohibiciones e incompatibilidades	funcionamiento anormal de los juzgados y tribunales	<ul style="list-style-type: none"> Errores Negligencias Infracciones Sanciones Recursos
6. Código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia	<ul style="list-style-type: none"> Garantizar el buen uso de los medios técnicos e informáticos al servicio de la Administración de Justicia. Posibilitar una mejora en la red de comunicaciones facilitando la interoperatividad de las distintas aplicaciones informáticas territoriales. 	<p>Datos históricos del sistema que permitan conocer el nivel de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilización de los equipos informáticos Instalación y utilización de los programas Registro, actualización, autenticidad, integridad y respeto de la privacidad de información sobre procedimientos judiciales y seguimiento de actividad Uso de los esquemas de tramitación Integración de resoluciones judiciales en sistemas informáticos Mantenimiento de la aplicación de gestión procesal y documentos integrados Uso, deficiencias y cumplimiento del Código de Conducta Seguridad en los programas y archivos



<i>Competencias</i>	<i>Necesidades de información</i>	<i>Datos</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Finalización de vinculación funcional o laboral con la Administración de Justicia • Acceso a la red interna • Navegación en la red de internet • Uso del correo electrónico • Firma electrónica • Creación de páginas web

4 Impacto de las reformas normativas sobre la estadística judicial

Sobre la base de las fuentes consideradas en este estudio, puede delinearse un resumen de las necesidades básicas de información que afectan **en el presente** a los distintos actores involucrados. No obstante, resulta más difícil proyectar hacia el futuro estos requerimientos puesto que los cambios normativos, en tanto afectan al funcionamiento y las competencias de los órganos implicados, generan nuevas necesidades. Solo mediante un análisis íntegro, en cada caso, de los medios y recursos que requerirán las reformas, podrá preverse la dimensión de los cambios que han de realizarse.

El vehículo principal para manifestar la voluntad de cambio e innovación en el seno de la Administración de Justicia lo ha constituido el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en donde, de forma consensual entre los dos principales partidos políticos, se han anunciado cambios y modificaciones normativas.

A continuación se ofrece una lista de las más substanciales reformas que se sucederán en la legislación o que han entrado en vigor recientemente y que, de algún modo, van a afectar a las necesidades de información estadística. Además, los puntos que anuncian cada reforma legislativa se completan con un breve análisis de los cambios más esenciales que comportan:

- a) Quizá, la reforma más importante es la relativa a la **Ley Orgánica del Poder Judicial**. Por citar un ejemplo, donde la herramienta estadística será vital, es la gran reforma de la Oficina Judicial. Esta se basará en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. Además funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, de manera que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad.
- b) El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en su punto segundo, informa sobre la introducción de mejoras en la **Ley Orgánica del Tribunal**

Constitucional. Así, se pretende por medio de estas potenciar su rol de máximo garante del orden constitucional, a la vez que se propone una agilización de su funcionamiento. La introducción de preceptos que amplían la oportunidad de presentar recursos de amparo aumentará sin duda la carga de trabajo del Tribunal Constitucional.

Como ejemplo de la información que deberá repasarse para desarrollar convenientemente este propósito, se observará, entre otros datos, la distribución de la carga de trabajo los distintos magistrados del Tribunal Constitucional. También deberán considerarse otras circunstancias y antecedentes (recursos, trámites, admisiones...) para el desarrollo de una evaluación previa y consecuente que permita trazar un plan de acción eficaz.

- c) Se anuncia en el Pacto de Estado la creación de un nuevo **Estatuto de Jueces y Magistrados**. Con esta reforma legislativa se pretende clarificar los medios de acceso y apostar por la carrera judicial, restringiendo considerablemente los servicios extraordinarios. Se apuesta, además, por unas oposiciones que valoren más la *madurez, cultura y capacidad argumental y de análisis*.

Pero no son estas las propuestas que más inciden, en este punto quinto del Pacto de Estado, sobre los requerimientos de información necesarios para acometer las acciones de reforma. Este aspecto informativo y clarificador se encuentra, principalmente, en los índices de calidad y de rendimiento que elabora el Consejo General del Poder Judicial puesto que, en adelante, el Pacto propone que sean estos los que conformen una nueva idea de carrera judicial.

- d) El punto séptimo del Pacto de Estado para la reforma de la justicia manifiesta claramente la intención de **incentivar el rendimiento de los jueces por medio de un nuevo sistema de retribuciones**. Para ello, ha entrado ya en vigor la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

Esta es la reforma que requiere un mayor énfasis en la configuración de un modelo estadístico: el análisis del rendimiento, la calidad y la producción incidirán

de forma notable en la composición del este modelo. Los datos que pueden emplearse para ofrecer indicadores apropiados son diversos y, por la naturaleza económica de su fin, sobrepasan el ámbito judicial. Será necesaria tanto la explotación de las bases de datos de los sistemas de gestión como la obtención de información referente a la administración de recursos personales (ya sea por las Comunidades Autónomas o por el Ministerio de Justicia).

- e) Se propone también en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia el establecimiento de un **sistema de responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades**. En el punto octavo del Pacto se especifica además la necesidad de crear fórmulas de reparación del daño. También se mejorará el régimen disciplinario y se crearán nuevos métodos de análisis y de auditoría operativa.

Todos estos aspectos incidirán notablemente en los requerimientos de información, así como en la necesidad de estructurarla y conseguir medias, índices e indicadores que posibiliten su valoración. Esta información estadística debe reflejar datos que permitan la corrección de las actuaciones que se aparten del funcionamiento normal de la Administración de Justicia. Del mismo modo se requerirán, tal y como se ha indicado, indicadores que evalúen negligencia, disciplina y otras actividades administrativas y de gestión (recogidas en el pacto de forma genérica como nuevos métodos de análisis y de auditoría operativa).

Se debe abordar por último, los cambios que sobrevendrán en el funcionamiento de la administración de justicia con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como todo cambio operativo y procedimental, provocará ajustes e innovaciones en la obtención y exposición de información estadística. Así, conviene revisar cuáles son los cambios más importantes que contiene la nueva ley en su articulado y cómo van a afectar al modelo estadístico que se estudia en el presente texto.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, desglosa los ámbitos de influencia de la nueva ley de enjuiciamiento en diez puntos principales. Partiendo del análisis

que se ofrece en ese texto consensuado, se desgranar a continuación aquellos puntos más influyentes:

- a) Agilización de los procedimientos. Esta propuesta incluye una mejora de los procedimientos abreviados, la inmediatez de las causas sobre delitos flagrantes y graves y la simplificación de los trámites. Llevar a la práctica estas intenciones, además de la transformación procesal inherente al cambio, tendrá un coste eminentemente material, en el que se incluirá tanto un incremento de la calidad de las relaciones de la administración de justicia con la fiscalía, la policía y los colegios de abogados, como una evaluación (y posible reconsideración) de los recursos humanos empleados en las guardias.

Básicamente, para la evaluación de un progreso encaminado a reducir la duración y facilitar las diligencias, deben tomarse en consideración datos como: plantilla, mapa judicial, procedimientos registrados, delitos imputados, fases de los procedimientos, trámites y las fechas de cada uno de estos elementos.

- b) Fortalecer la protección de aquellas personas involucradas en los procedimientos, así sean víctimas o detenidos. Así, tanto los agredidos, víctimas de delitos violentos (a los que se procurará una especial atención), como los detenidos (en línea con la resolución 43/173 de 1 de diciembre de 1988) deberán ser objeto de un trato digno, acorde con su situación.

En el plano estadístico, la defensa de estos afectados debe realizarse desde valores indicativos, exponentes y representativos, que sustenten un aumento de las medidas de protección o de vigilancia cuando sea necesario. Realizar este trabajo requerirá información de los sistemas de gestión procesal pero también de la policía, de los colegios de abogados y de otros actores involucrados con la administración de justicia (forenses, equipos psicosociales, servicios de traducción, etc...). La coordinación y la puesta en común de todos los datos obtenidos de distintas instituciones se prevé, en este sentido, la más ardua tarea para dotar de coherencia al resultado estadístico obtenido.

- c) Otros cambios procesales solicitan una atención especial, en concreto la readaptación del sistema de jurado y la extensión de la doble instancia. Ambos requieren un ajuste en la gestión procesal y en la administración de recursos.

La reforma del sistema del jurado exigirá un examen meticuloso de los fallos, errores o lagunas que se han observado desde su puesta en funcionamiento, aglutinando información judicial y administrativa, sin descuidar la opinión de la ciudadanía que ha intervenido como elemento activo o pasivo.

La extensión de la doble instancia está encaminada a asegurar que todas las decisiones penales sean apelables –excluyendo, claro está, a la última instancia-. La aplicabilidad de esta propuesta quedará reforzada con un mecanismo que asegure información fiable sobre las condiciones y las circunstancias en las que se ejercen las apelaciones. También se requerirá información adicional: sentencias, fallos, carrera judicial, rendimiento de jueces y magistrados, calidad del servicio prestado, etc...

- a) En el apartado diecisiete del Pacto de Estado para la Reforma, pueden encontrarse dos propuestas de carácter técnico, que afectan al *establecimiento de métodos de investigación y procedimentales apropiados para el enjuiciamiento de los delitos de nuevo cuño* y a la *adaptación de la regulación de los medios de prueba*. Estos dos puntos subrayan la relevancia de contar con una coordinación entre los medios técnicos y metodológicos.

En este caso, la obtención de información se constituye como elemento primordial. El diseño de nuevos métodos de investigación queda delimitado a los ámbitos judicial y policial, cuyas instituciones se verán obligadas -con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal- a intercambiar información mediante protocolos ágiles y mejorados.

Los medios de prueba, por su naturaleza, también conciernen a un nuevo actor: los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Esto es así porque estos medios afectan tanto a la potestad administrativa y de gestión de recursos materiales como a la esencia de la materia jurisdiccional, ya sea en su vertiente procesal o en la sustantiva.



A la luz de lo apuntado por el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, la coordinación de estos dos actores en el intercambio fluido de información procesal y de desarrollo tecnológico se eleva como demanda obligada e indispensable.

5 Conclusiones

Del desarrollo del presente estudio se desprenden una serie de principios que merecen fijarse en este capítulo en concepto de conclusiones, sin perjuicio de que algunos de ellos ya se hayan expuesto anteriormente.

En primer lugar es necesario incidir en la distinción entre “*estadística judicial*” y “*explotación estadística necesaria para la gestión*”. Ya que la regulación actual sobre esta materia no es nítida, se hace necesario atender a las necesidades que los distintos actores tienen en este ámbito. Es a partir de esta premisa que se ha de establecer la diferencia entre estadística judicial y estadística de gestión.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como órgano de gobierno del Poder Judicial, es titular de la estadística judicial como instrumento de apoyo en el ejercicio de sus competencias.

Por lo que respecta a la “*administración de la Administración de Justicia*”, el Gobierno Vasco, en el ejercicio sus competencias, también se ha de dotar de la información y herramientas necesarias para gestionar correctamente sus atribuciones. El acceso y obtención de la información para utilizar con los fines expuestos en este documento no implica ni mucho menos acceder hasta el último nivel de los datos personales de los sistemas informáticos de gestión procesal. Se está planteando un acceso a la información agregada que permita la gestión y análisis de la información, quedando salvaguardado el detalle final de los datos.

Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo tienen necesidades estadísticas distintas atendiendo a sus necesidades derivadas de sus atribuciones. Por tanto, es necesario separar ambas problemáticas, sin dejar en una sola mano toda explotación de información.

Otra cuestión distinta es la problemática relativa a la privacidad y propiedad o titularidad de los datos. Las necesidades de información –y su explotación- que tiene el Gobierno Vasco no son contrarias a estos principios. En principio, ha de ser indiferente la titularidad de los datos, siempre que los roles e instrumentos de

comunicación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estén establecidos de forma que permitan abordar el acceso a los datos y la elaboración de los estudios estadísticos pertinentes. Establecidos estos patrones, se ha de proceder a dejar fijadas las restricciones necesarias para salvaguardar la privacidad de la información.

El acceso y explotación de la información por parte del Gobierno Vasco tampoco interfiere en la función jurisdiccional de los órganos judiciales: *juzgar y hacer ejecutar lo juzgado*. Incidimos otra vez en que el Poder Ejecutivo tiene competencias directas sobre medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. Para llevar a cabo esta función ha de poder obtener aquella información que le sirva para tomar las decisiones oportunas. Información que muchas veces estará relacionada con el objeto de la actividad jurisdiccional del Juzgado o Tribunal (asuntos entrados, resueltos, recursos interpuestos, etc.).

Finalmente, y a la vista de la información necesaria que requieren tanto el CGPJ como el Gobierno Vasco para sus explotaciones estadísticas, es necesario incidir en determinados aspectos relacionados con los sistemas informáticos:

- Muchos de los datos están previstos en los sistemas informáticos de gestión procesal. Pero para que la información que se obtenga de ellos sea uniforme y fiable han de quedar claramente fijada la infraestructura jurídica que todos sistema informático de esta índole necesita para su funcionamiento (tablas de códigos, esquemas de tramitación, trámites tipificados y modelos de documentos).
- Aparece otra información que no está prevista en las bases de datos informáticas. En este sentido, se deberá decidir su inclusión en el sistema de gestión procesal u otro sistema satélite (personal, gestión de cuentas de consignación, etc.).
- También nos encontramos con el supuesto de que la información requerida está prevista en el sistema informático, pero no es de obligado cumplimiento. En estos casos, la experiencia nos ha mostrado que su actualización es mínima. En estos casos, si se desea obtener información fiable se deberá



repensar su opcionalidad. En este sentido, se ha dado un paso importante con la reciente aprobación por parte del CGPJ del *“Código de Conducta para Usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia”*.